

El bloque de poder en El Salvador¹

*Gustavo Ernesto Emmerich
Raúl Benítez Manaut*

La bien conocida afirmación de que 14 familias dominan en El Salvador no resiste el más elemental análisis, como se tratará de mostrar en la presente revisión de la literatura sobre el tema. En efecto, tal afirmación sugiere la existencia de un bloque de poder cerrado, dinástico e inmovilista en El Salvador contemporáneo; verlo así oscurece diversas realidades insoslayables: que en el último cuarto de siglo el país ha ido perdiendo su carácter eminentemente agrario, ha diversificado su estructura productiva, han aparecido nuevos sectores burgueses que disputan (con éxito relativo) su cuota de poder a la tradicional oligarquía terrateniente, y se han transformado las modalidades de la dominación político-militar (en especial a partir de 1979). Fenómenos, todos estos, vinculados con la creación del Mercado Común Centroamericano (1960); con los efectos sociales y demográficos de la guerra con Honduras (1969); y con el agudizamiento de las tensiones y luchas sociopolíticas a partir de los setenta y, sobre todo, en los ochenta, con el estallido de la guerra civil.²

Breve recuento histórico

La crisis mundial de 1929 tuvo un fuerte impacto en El Salvador. Para empezar, hizo caer verticalmente las exportaciones de café, las más importantes del país. Tal caída afectó no solamente los ingresos de divisas, sino también —y muy directamente— los de la



oligarquía cafetalera. La reacción de este grupo fue doble: Por un lado, en lo político impulsó y aprovechó el derrocamiento del presidente liberal progresista Arturo Araujo y su reemplazo por el régimen militar prooligárquico del general Maximiliano Hernández Martínez (a partir del "martinato" [1931-1944], la oligarquía entregó el manejo directo del Estado a manos militares). Por el lado económico, la oligarquía diversificó sus negocios e inició un tímido pero temprano proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, que se robusteció luego de la Segunda Guerra Mundial, gracias al incremento en el precio internacional del café registrado en ese entonces.

Para finales de los cincuenta, en un marco de gobiernos militares revestidos de ropajes constitucionales, la oligarquía salvadoreña había creado la planta industrial más diversificada y desarrollada del istmo

centroamericano (luego de la guatemalteca). La creación del Mercado Común Centroamericano en 1960 favoreció a la industria salvadoreña, pues le facilitó el libre acceso a los mercados de sus vecinos de menor desarrollo (en especial Honduras).

La reacción hondureña contra la creciente penetración comercial —y poblacional— de su vecino salvadoreño, más pequeño y poblado, estuvo en la base de la llamada "guerra del fútbol", estallada entre los dos países en 1969. Una de las consecuencias de la guerra fue la expulsión por parte de Honduras de decenas de miles de campesinos salvadoreños inmigrantes, que al retornar a su país de origen se encontraron sin tierras y sin trabajo. Su retorno agudizó el problema demográfico salvadoreño e intensificó las luchas sociales en el país, principalmente en el campo.³

El poder de la oligarquía y de sus agentes gobernantes comenzó entonces a ser cuestionado por lo menos en dos frentes. Por una parte, se organizaron diversos movimientos guerrilleros, como las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí y el Ejército Revolucionario del Pueblo; por otra, se constituyó la Unión Nacional de Oposición (UNO integrada por demócratacristianos, socialdemócratas y sectores comunistas), que intentó llegar al poder por la vía electoral. Los escandalosos fraudes perpetrados contra la UNO en las elecciones presidenciales de 1972 y 1977 llevaron a muchos miembros de la oposición moderada a adoptar posturas más radicales y revolucionarias.

La imposición fraudulenta del general Carlos Humberto Romero en las elecciones presidenciales de 1977 acentuó el clima de ilegitimidad y dio pie a la intensificación de la contestación popular —armada, política sindical— contra el régimen. El 15 de octubre de 1979, un grupo de oficiales jóvenes depuso al presidente Romero, constituyó una junta cívico-militar de gobierno, e inició un rumbo político moderadamente progresista. Durante 1980, la junta sufrió una progresiva derechización, que desembocó prontamente en la guerra civil. De tal proceso derivó el nombramiento del líder demócrata José Napoleón Duarte como presidente provisional, y su posterior elección —luego de un interregno a cargo de Álvaro Magaña (1982-1984)— como presidente constitucional, en 1984.

A partir de 1980, es clara una profunda crisis de hegemonía en el país. La oligarquía ve seriamente cuestionada su dominación y el poder político controlado por los militares sufre un gran desgaste, marcado por la imposibilidad de continuar ejerciendo el control de la sociedad. Al mismo tiempo, la emergencia de los sectores populares, que se agrupan en 1980 en el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y en el Frente Fara-

bundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), replantea y redefine el rumbo de la sociedad. Se configuran entonces dos proyectos concretos: el democrático, revolucionario y popular, encabezado por la alianza FDR-FMLN, y el contrarrevolucionario-reformista, encabezado por el PDC y el alto mando de las fuerzas armadas, con el apoyo decidido de Estados Unidos (el PDC y la fuerza armada firman un pacto al respecto el 9 de enero de 1980).⁴ Por otro lado, existe también el proyecto contrarrevolucionario de restauración oligárquica, conducido por el partido ARENA. Éste (la correlación de fuerzas político-militares) define el rumbo del país en la década de los ochenta, desde que estalla la guerra civil abierta en enero de 1981.

Base material de la burguesía salvadoreña

Existen diversos estudios sobre la base material de la burguesía salvadoreña, entre los cuales destaca, por la solidez y actualidad de su información, el de Manuel Sevilla.⁵

Sevilla informa que en 1979 existían 332 635 empresas en El Salvador, de las cuales 2 271 (o sea, el 0.7%) podían considerarse grandes o gigantes. Estas pocas empresas controlaban el 45% de la producción nacional, el 29% del empleo y el 59% del excedente.

De las 2 271 empresas grandes o gigantes, 1 961 se ubicaban en el sector agropecuario. Aun cuando no tan numerosas, las empresas grandes y gigantes tenían un peso más que significativo en otros sectores: las 102 empresas manufactureras grandes o gigantes controlaban el 69% de la producción nacional de manufacturas, y las 126 empresas comerciales grandes o gigantes acaparaban el 46% del total de ventas (mayoristas y minoristas); en los servicios el índice de concentración era

menor, aunque sólo siete empresas controlaban el 20% de la producción del sector. En ramas específicas se daban índices de concentración aun mayores: las empresas grandes y gigantes controlaban el 84% de la refinación de azúcar, el 84% del beneficio (procesamiento) del café y el 75% de su cultivo, el 54% de las plantaciones de algodón, el 61% de la ganadería, el 64% de la construcción y el 54% del transporte.

Los datos sobre tenencia de la tierra merecen una consideración especial. Según el Tercer Censo Agropecuario, de 1971, existían 270 868 explotaciones agrícolas, de las cuales el 92.5% (que ocupaban sólo el 27.1% de las tierras agrícolas) podían ser consideradas minifundios. En el otro extremo se encontraban 1 941 explotaciones agrícolas (0.7% del total) mayores de 100 hectáreas, que ocupaban un total de 561 518 hectáreas (38.7% de las tierras agrícolas). En este grupo de grandes explotaciones sobresalían 202 que eran mayores de 500 hectáreas, y que poseían 218 641 hectáreas, o sea 15% de las tierras explotables.

Y todavía podría añadirse: había sólo 15 propiedades de más de 2 500 hectáreas. Se ha podido saber, además, que en 1961 sólo seis familias (Guirola, Sol, Dueñas, Daglio, Samayoa, y Romero Bosque) eran dueñas de nada menos que 71 923 hectáreas. Más todavía: las explotaciones agrícolas más grandes acaparaban las tierras más aptas para los tres principales productos de exportación agrícola: el café en las tierras altas, la caña de azúcar y el algodón en las planicies costeras y los valles.⁶

Con base en tales datos, puede decirse, con Sevilla, que:

...existe un alto grado de concentración económica; un reducido grupo de empresas dominantes y estratégicas controla la casi totalidad de la actividad económica. En el otro extremo,

la inmensa mayoría de las empresas y, probablemente [de] los empresarios salvadoreños tienen niveles de actividad minúsculos y con características de subsistencia.⁷

Según las cifras que proporciona el mismo Manuel Sevilla, 1 309 individuos, agrupados en 114 grupos familiares, controlan las 2 271 empresas estratégicas:

Al conjunto de estos grupos de individuos y familias que controlan, hegemonizan y, en última instancia, dirigen las empresas grandes y gigantes de la economía salvadoreña es a quienes justificadamente se puede denominar la oligarquía o grupo dominante.⁸

Sevilla destaca, en conclusión, el peso no sólo económico, sino también político, de la oligarquía:

Sin restarle importancia a los efectos económicos y sociales inducidos por la concentración, es posible que los efectos más perversos sean los generados en el orden político. La concentración de la riqueza y la propiedad de los medios fundamentales de producción significa la acumulación de poder político por parte del segmento oligárquico de la empresa privada y, consecuentemente, una capacidad irrestricta de imponer su voluntad y presentar sus intereses como los de toda la nación. El poder político de la empresa privada oligárquica permite a la misma doblegar y someter a sus intereses el aparato todo del Estado y, de manera muy especial, el proceso de formulación y administración de la política económica. Por otra parte, a lo largo de la historia nacional, el grupo oligárquico de la empresa privada ha sometido a sus intereses a la fuerza armada, asignándole la función de mantener las estructuras injustas mediante el ejercicio de una creciente y violentísima represión; a las organizaciones gremiales de la empresa privada e incluso de la pequeña y mediana empresa, transformando a éstas en caja de resonancia de los intereses oligárquicos y puntos de apoyo incondicional para oponerse a cualquier intento de democratización económica y/o política.⁹

En los años ochenta, por los efectos de la guerra civil, se da una profunda modernización y reestructuración de la oligarquía.¹⁰ En el nivel estructural, se modifican radicalmente la agricultura y la industria.

En las zonas rurales del norte y oriente del país, principalmente en los departamentos de Chalatenango, Cabañas, Morazán, San Miguel, La Unión y Usulután, la presencia y consolidación de los efectivos militares del FMLN ha provocado un éxodo de población muy importante y, en consecuencia, el abandono de los poderes políticos tradicionales y la conformación de lo que el FMLN denomina poder popular. A su vez, en el resto del territorio ha habido un desmembramiento gradual del poder oligárquico-terrateniente por la reforma agraria. Se han creado numerosas cooperativas con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del gobierno de Estados Unidos (esto es parte del plan de contrainsurgencia puesto en marcha por Estados Unidos).¹¹ En lo que hace al desplazamiento de población, sólo el gobierno ha trasladado a 396 833 personas de los lugares conflictivos a la periferia y al suroccidente del país.¹² Esto, con el propósito de evitar que esos grupos de población simpaticen con el FMLN, aunque con ello los terratenientes pierdan su control sobre importantes sectores poblacionales y espacios territoriales.

En los sectores industriales la guerra también ha repercutido en forma negativa; se ha producido una gran fuga de capitales —producto del desmantelamiento de numerosas industrias manufactureras—. El conjunto de modificaciones verificadas en los sectores rural e industrial en los años ochenta, a lo que se añade la desviación de recursos estatales de los sectores económico y social hacia la guerra, más los efectos negativos de la crisis económica internacional, han provocado una recesión y un estancamiento de la economía, sintetizable en la siguiente información:

El Producto Interno Bruto (PIB), después de crecer entre 1970 y 1975 a una tasa anual de 5.5%, y entre 1975 y 1980 al 1%, evolucionó en los ochenta de la siguiente manera: 1980, -9%; 1981, -8.4%; 1982, -5.7%; 1983, 0.6%; 1984, 2.3%; 1985, 2%; 1986, 0.6% y 1987, 2.6%.¹³

Frente a lo anterior, la empresa privada ha transformado notablemente su actitud política. La Alianza Productiva (AP), creada en mayo de 1980, con representantes de la Asociación Nacional de Empresas Privadas (ANEP), la Cámara de Comercio e Industria, la Asociación Salvadoreña de Industriales, la Federación Nacional de la Pequeña Empresa, la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños, la Federación de Profesionales, la Unión de Directores de Empresas de El Salvador, y el Consejo Coordinador de Empresas Agropecuarias,¹⁴ responde a los intereses de la oligarquía frente a los sectores obrero y campesino; se niega a cualquier reconocimiento político de los sectores populares,¹⁵ y reiteradamente se ha opuesto al programa de reformas impulsado por el PDC, principalmente a la reforma agraria y a la nacionalización de la banca y el control estatal de las divisas producidas por el comercio exterior (que afecta principalmente a cafetaleros, algodóneros y a los productores de azúcar).¹⁶

En términos políticos, la mayoría de los sectores económicamente dominantes comparte el proyecto de ARENA, y constituyen el pilar fundamental de este partido.

El aparato político

Desde 1931 hasta 1979, El Salvador fue gobernado directamente por los militares. Desde 1979 a la fecha, los militares han participado también decisivamente en el gobierno, primero por medio de sucesivas juntas y

gobiernos provisionales cívico-militares (1979-1984), luego por la vía de la dependencia de los presidentes constitucionales Napoleón Duarte y Alfredo Cristiani hacia las fuerzas armadas, como su única forma de mantenerse en el poder en circunstancias de guerra civil.

La presencia directa de los militares en funciones de gobierno no fue obstáculo para que el bloque de poder crease un aparato político-partidario, en cuyo funcionamiento pueden distinguirse varias etapas.¹⁷

La primera abarca de 1931 a 1944, años de la dictadura de Hernández Martínez, en que existió virtualmente un único partido legal: el Pro-Patria. Con la caída del dictador, en 1944, se abrió una segunda etapa, caracterizada por un cierto discurso reformista de algunos actores del bloque de poder, reunidos en el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD). En 1948, el PRUD, depurado de sus elementos más reformistas, derrocó al general Castañeda Castro (continuator de Hernández Martínez) e institucionalizó la alianza entre militares y oligarquía, que controló el gobierno hasta 1960.

En octubre de 1960, el gobierno del coronel José María Lemus fue derrocado por un golpe militar organizado por militares seguidores del expresidente Óscar Osorio y apoyado por sectores políticos liberales y progresistas. Los espacios democráticos entonces abiertos fueron rápidamente cerrados cuando en enero de 1961, un nuevo golpe devolvió el poder a sus detentadores tradicionales. Se redactó una nueva constitución, se disolvió el PRUD, y se fundó sobre sus restos el Partido de Conciliación Nacional (PCN), que en 1962 llevó al poder (sin oposición significativa) al coronel Julio Adalberto Rivera. Con ello se inició la tercera etapa del aparato político del bloque de poder, la del predominio del PCN. Sus primeros años fueron de relativa liberalización política, lo que permitió el fortalecimiento de diversas

fuerzas políticas opositoras, en especial el recién nacido Partido Demócrata Cristiano (PDC), que se convirtió rápidamente en primer partido de la oposición.

En 1972 el PDC se convirtió en eje de la UNO, misma que agrupaba además al socialdemócrata Movimiento Nacional Revolucionario y a la izquierdista Unión Democrática Nacionalista. Según todos los observadores independientes, la UNO o ganó las elecciones presidenciales de ese año en las urnas, aunque el triunfo le fue arrebatado —fraudulentamente—, a la hora del conteo de votos, por el PCN, el cual impuso en la presidencia al coronel Arturo Armando Molina. El colosal fraude de 1972, repetido en los comicios presidenciales de 1977 (otra vez en detrimento de la UNO y en beneficio del PCN y su candidato, el general Romero) cerró las puertas a toda manifestación legal efectiva del descontento popular y dio auge a la insurgencia guerrillera. Ante esto, Romero acentuó la política de mano dura contra la oposición —legal y/o armada—, hasta ser derrocado en 1979 por un golpe de la oficialidad progresista —que desde 1944-48 nunca había dejado de constituir un sector bien definido, aunque minoritario, del ejército—. Se abre entonces la actual etapa de polarización de fuerzas y de guerra civil, que Raúl Benítez caracteriza así:

El 15 de octubre de (1979) el ejército prácticamente se divide en dos, cuando la llamada "juventud militar" da un golpe de Estado apoyada por los sectores progresistas del país. El sistema político, encabezado por el PCN, que en las dos últimas elecciones presidenciales de 1972 y 1977 había llegado al poder mediante grandes fraudes electorales, se derrumba por completo. El país se encuentra en una grave "crisis orgánica", siendo evidentes en ese momento tres proyectos políticos: el conservador, encabezado por las fuerzas que habían sido desplazadas del poder; el reformista modernizante, encabezado por el conjunto de fuerzas que sostienen a la junta cívico-militar

de gobierno; y el revolucionario, que dirigen principalmente los grupos político-militares, que se agruparán un año después en el FMLN. El proyecto reformista deja de tener vigencia muy rápidamente. Hacia el 9 de enero de 1980, con el pacto PDC-fuerza armada, las reformas iniciadas dan un vuelco para apoyar el proyecto contrainsurgente, polarizándose la situación durante 1980. En el sector democrático-revolucionario se ubica la alianza FDR-FMLN (el FDR se crea en abril y el FMLN en octubre); y en el conservador el PDC, las fuerzas armadas y los sectores económicos y políticos oligárquicos.¹⁸



En suma: al igual que en 1960-61, el experimento democratizador fue rápidamente revertido. A lo largo de 1980, los miembros más progresistas de la junta cívico-militar establecida en octubre de 1979 fueron abandonando sus cargos, y el poder quedó formalmente en manos del PDC y de su líder, Napoleón Duarte, poder que en la realidad se sustentaba en el apoyo mayoritario del ejército y de Estados Unidos a su estrategia antiinsurgente basada en una política de reformas con represión. Las tardías y limitadas reformas no consiguieron evitar el estallido de la guerra civil, incentivada por graves violaciones a los derechos humanos, como el asesinato del arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, y de la dirigencia en pleno del Frente Democrático Revolucionario, hechos ocurridos en marzo y noviembre de 1980, respectivamente.

A la derecha del PDC se organizaron diversos partidos, de los cuales el principal es Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), creado en septiembre de 1986 y apoyado por los sectores oligárquicos y militares más férreamente opuestos a todo cambio social.¹⁹ ARENA acusa a Duarte de ineficacia en el esfuerzo contrainsurgente, dirige un nuevo discurso político basado en un agudo nacionalismo y en la oposición a las estrategias estadounidenses de reformas con represión selectiva, y preconiza en cambio la "guerra total" contra la insurgencia.²⁰

Desde 1980 se da un esfuerzo sin precedentes en El Salvador por evitar que la crisis culmine en el ascenso político del FDR y en el triunfo militar del FMLN. Estados Unidos apoya dicho esfuerzo, para evitar a toda costa que en El Salvador suceda un fenómeno similar al nicaragüense. Este esfuerzo se da en cuatro niveles: el económico, el político, el militar y el internacional.

Se inicia un proceso de asistencia para evitar que la economía acompañe a la debacle política existente. Desde el pacto PDC-F.A., Estados Unidos apoya firmemente

al gobierno para que pueda resistir en términos financieros la fuga de capitales y pueda sostener a los aparatos militares y de seguridad, le proporciona aproximadamente 3 mil millones de dólares entre 1980 y 1988.²¹ Así se apoya la completa reestructuración de las fuerzas armadas, tendiente a su profesionalización, para emprender la guerra de contrainsurgencia que se aproximaba.

En términos políticos, se busca rehacer al régimen en todos los niveles: modificar la legislación política, redactar una nueva constitución, dar vida a un sistema plural de partidos políticos y, principalmente, buscar la legitimidad del régimen. Para ello se consolida la junta cívico-militar de gobierno, encabezada por Duarte, quien se responsabiliza de vehicular este proyecto. Entre 1980 y 1982 dos son los objetivos: evitar el avance del FMLN y darle cuerpo al sistema político. Se convoca a elecciones para una Asamblea Constituyente, el 28 de marzo de 1982, y se conforma la misma, básicamente, por representantes del PDC, ARENA y el PCN. Luego se crea un Gobierno de Unidad Nacional, resultado del Pacto de Apaneca, presidido por Álvaro Magaña, mientras la Asamblea redacta la nueva constitución política, cuyo texto se aprueba en diciembre de 1983, y se convoca a elecciones para presidente de la República para marzo de 1984.²²

Las elecciones presidenciales de 1984, celebradas en medio de una guerra civil y sin participación de la izquierda, fueron ganadas —en segunda vuelta electoral— por el PDC. Los resultados de la primera vuelta expresaron la realidad del aparato político a disposición del bloque de poder: el centrista PDC, apoyado por Estados Unidos, 43% de los votos; el ultraderechista ARENA, 30%; y el viejo PCN, 19%. La prolongación de la guerra civil llevó a que las elecciones legislativas y municipales de 1988 fueran ganadas arrolladoramente por ARENA, lo cual es un indicio de que la población salvadoreña perteneciente o que apoya al bloque de

poder ha venido inclinándose por una línea político-militar aun más dura que la de Duarte para terminar con la insurgencia y la crisis hegemónica.

Entre 1984 y 1989, el PDC sufrió un severo desgaste debido a su caótica y fracasada acción de gobierno (hay múltiples acusaciones de malversación de fondos), por la grave crisis económica y por su incapacidad de ofrecer una salida (política o militar) al conflicto armado.

Debido al desgaste del PDC, las elecciones presidenciales de marzo de 1989 representaron, por un lado, una renovación completa del sistema político, y por el otro fueron expresión de que la institucionalidad y legitimidad buscadas desde 1980 están en proceso de consolidación. El triunfo por mayoría absoluta de ARENA,²³ que obtuvo el 54% de los votos (el PDC obtuvo el 36%, el PCN el 4.7% y la izquierdista Convergencia Democrática menos del 4%)²⁴ significa la rearticulación del bloque en el poder y de la dominación oligárquica. De nuevo aparece el sistema político legitimado: el partido gobernante, ARENA, controla el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la mayoría de los municipios, y ha logrado rehacer y unificar en todos los niveles el poder económico y político; y se han dado nuevas alianzas entre la iniciativa privada (empresarios, comerciantes y el gran capital monopolístico), el alto mando de las fuerzas armadas, los Estados Unidos (que contribuyen con más del 50% del presupuesto del gobierno) y el poder político.

El aparato militar

Los militares ejercieron el gobierno casi ininterrumpidamente desde 1931 hasta 1979, y siguen teniendo una fuerte influencia sobre los posteriores gobiernos democristianos y arenistas. No conforman, sin embargo,

un grupo política o ideológicamente homogéneo. Sus sectores progresistas, que tuvieron su mayor peso durante la segunda mitad de los años cuarenta, aunque participaron también en los golpes democratizadores de 1960 y 1979, fueron definitivamente erradicados de la institución armada como consecuencia de la polarización producida por la guerra civil de los ochenta.²⁵

En estos últimos años, el sector mayoritario del ejército apoyó activamente al PDC, con la esperanza de que las políticas reformistas de éste contuviesen el ascenso de la insurgencia y que el gobierno estadounidense continuase brindando ayuda militar masiva. Otros sectores militares más belicosos y anticomunistas se reunieron alrededor del ultraderechista ARENA, liderado por el exmayor Roberto D'Aubuisson, y en menor medida en torno al PCN. La coexistencia de estas diversas líneas políticas en el interior de las fuerzas armadas ha sido difícil y ha dado lugar a varias recomposiciones de sus altos mandos en los últimos años.²⁶

Pese a sus divisiones y a su estado virtualmente deliberativo, no cabe duda de que, frente a la guerra civil, las fuerzas armadas se han convertido —más que nunca— en pilar fundamental del bloque de poder. Sus efectivos pasaron de 15 mil hombres en 1979, a aproximadamente 60 mil en 1988,²⁷ y el presupuesto militar del gobierno se incrementó, del 14.4% del total del gasto gubernamental en 1979, al 25.9% del mismo en 1987.²⁸

Según Fernando Flores Pinel:

*Las fuerzas armadas han asumido el carácter de una nueva clase política que tiene conciencia de su peso específico en la estructura nacional del poder. No están dispuestas a abandonarlo, pero el nivel de institucionalización política que han logrado puede permitirles redefinir rumbos quebrando su alianza con la oligarquía. La gestión directa que tienen en la administración estatal constituye el aspecto más importante a su favor.*²⁹

La modernización de las fuerzas armadas salvadoreñas en los años ochenta, para poder poner en marcha la estrategia contrainsurgente diseñada por el *U.S. Military Group*, ha sido acelerada. En términos cualitativos, el ejército salvadoreño ha profesionalizado a sus efectivos mediante múltiples programas de entrenamiento. Ha formado unidades militares nuevas, como los grandes batallones de Rápido Despliegue (Atlatl, Atonal y Ramón Beloso); ha creado 50 pequeños batallones conocidos como "cazadores", para lograr mayor movilidad hacia las zonas de combate, y ha organizado patrullas de reconocimiento, conocidas como Patrullas de Reconocimiento de Alcance Largo (PRAL), para penetrar en las zonas bajo control del FMLN.



Una rama que antes de 1980 tenía muy poco desarrollo es la fuerza aérea. Su fortalecimiento se dio por la necesidad de atacar posiciones guerrilleras con eficacia. El ejército salvadoreño contaba en 1988 con una moderna flota de aviones de combate (bombarderos), de transporte de carga y efectivos, y principalmente con una flota de más de 60 helicópteros artillados, que son el principal medio de transporte de tropas a las zonas de combate.

Dada su gran dependencia con respecto a la tecnología y el apoyo financiero de Estados Unidos, las fuerzas armadas son la rama del Estado que más estrechamente se ha ligado al proyecto de contrainsurgencia. Al mismo tiempo, por su creciente importancia en términos de efectivos y del presupuesto que se les asigna, sin lugar a dudas ocupan un lugar privilegiado como factor de poder real en el país.

La Iglesia católica

En las últimas dos décadas, la Iglesia católica ha visto transformarse su papel político: de sólido apoyo ideológico-moral del bloque de poder, se ha convertido en severa crítica de la injusticia social y la violencia política reinantes en El Salvador.³⁰

Si en 1932 la Iglesia ayudó a sofocar la rebelión campesina, en los años setenta se destacó por apoyar la organización popular. Incluso algunos sectores del clero progresista apoyaron la creación de la Federación de Campesinos Cristianos de El Salvador (FECCAS, más tarde integrada al Bloque Popular Revolucionario, que es una de las organizaciones integrantes del FDR). En 1979 y primeros meses de 1980, los sermones dominicales del arzobispo Romero se convirtieron en obligado centro de atención y reflexión para todos los que se oponían a la situación de injusticia y violencia prevaleciente en el país.

Al ir asumiendo el clero —y en especial algunas órdenes religiosas, como la de los jesuitas— un papel más activo y más definido en favor de los pobres y oprimidos, los embates gubernamentales —persecución, deportación, asesinato— contra la Iglesia se hicieron más y más frecuentes, hasta culminar con el asesinato del arzobispo Romero, en marzo de 1980. El asesinato del arzobispo, que se había erigido en vocero de los oprimidos y apóstol de la paz, aceleró el proceso de guerra civil.

Actualmente, sin que ello signifique una toma de partido por la insurgencia o por determinadas banderas políticas, la Iglesia sigue siendo severa censora de los actos gubernamentales —especialmente de aquéllos que afectan los derechos humanos— y abogada de la pacificación nacional.

Frente a la polarización económica, política y social producida por la guerra civil, la Iglesia católica ha logrado gran capacidad de convocatoria en los distintos sectores políticos y de la sociedad. Tanto el gobierno como el FDR-FMLN han aceptado su papel como mediadora y canal de comunicación entre ambas fuerzas. Un acontecimiento notable fue la tercera reunión de diálogo entre el FDR-FMLN y el presidente Duarte en la Nunciatura Apostólica de San Salvador, los días 4 y 5 de octubre de 1987. En 1987 y 1988 los altos representantes del clero presionaron en pro de la implantación de los acuerdos de Esquipulas II.

Un hecho sin precedentes en el país fue la convocatoria lanzada por la Iglesia a un Debate Nacional. El mismo, concretizado en julio y agosto de 1988, reunió al conjunto de las fuerzas sociales organizadas del país, excepto a las políticas (religiosas, sociales, universitarias, empresariales, estudiantes, profesionales, etc.) para discutir y formular propuestas frente a la crisis del país. La Iglesia recuperó su liderazgo como propiciadora de una solución política negociada al conflicto.³¹



Este nuevo papel desempeñado por la Iglesia católica se ubica desde una posición progresista frente al bloque de poder, que se niega a dar una solución política negociada al conflicto. No obstante, en la década de los ochenta han aparecido numerosas sectas religiosas protestantes, que en su mayoría intentan disputar la presencia del clero católico y que acompañan —en lo ideológico— al modelo de contrainsurgencia diseñado en El Salvador.

Conclusiones

En las últimas tres décadas, y en particular durante los años de guerra civil, la estructura social de El Salvador ha experimentado transformaciones que hacen obsoleto el conocido esquema de las "catorce familias" como exclusivo e inmóvil grupo dominante.

Entre estas transformaciones se cuentan: un proceso de diversificación (hacia actividades no agropecuarias) de las actividades económicas de la oligarquía terrateniente; la relativa pérdida de dominio de ésta sobre sus tierras, debida a la reforma agraria democristiana y al control de importantes zonas rurales por el FMLN; el éxodo hacia Estados Unidos (y hacia actividades empresariales allí radicadas) de buena parte de la élite terrateniente, motivado por la guerra civil; y el surgimiento de nuevos sectores burgueses, de raíz fundamentalmente urbana, orientados hacia actividades mercantiles, industriales, financieras y especulativas, no directamente ligadas con el agro, que toman su distancia respecto de las posiciones políticas de la oligarquía tradicional. Paralelamente a lo anterior, se produce el surgimiento de clases medias que por primera vez en décadas parecen capaces de dar una base de legitimidad y apoyo al cambiante bloque de poder.³²

Por otro lado, también se ha transformado la estructura estatal: ha tenido lugar una rápida modernización de la misma, orientada a hacer frente a los requerimientos de planificación —debida a la nacionalización de la banca y el comercio exterior y a la reforma agraria— y de contrainsurgencia. Se consolida así un moderno Estado contrainsurgente, cuyo pilar son las fuerzas armadas. El financiamiento de este nuevo Estado (que se conforma entre 1980 y 1983, al término de la redacción de la nueva constitución), proviene fundamentalmente de Estados Unidos. A la par de la conformación de este nuevo régimen político, se reforman con éxito el Parlamento (como medida de expresión del nuevo consenso-legitimidad "democrático") y, con mucho menos énfasis, el sistema judicial (Corte Suprema de Justicia).

Como consecuencia del amplio conjunto de transformaciones antes mencionadas, y también del relativo aislamiento político sufrido —tal vez por la prolongación indefinida de la guerra civil— por los sectores progresistas congregados en el FDR y el FMLN, el bloque de poder intenta reconstruir su base de legitimidad, con lo cual se repite en los ochenta un ciclo ya visto en 1944-48 y en 1960-63: golpe militar de signo progresista (en este caso, en 1979), instauración de algunas reformas sociales (en este caso, reforma agraria, nacionalización de la banca y control gubernamental de las divisas producidas por el comercio exterior), elaboración de una nueva constitución (en este caso, la de diciembre de 1983), relativa apertura del juego político-partidario, y finalmente reversión de todo el proceso sobre un partido (en este caso, ARENA) favorable al *statu quo*, que sea capaz de rearticular la dominación oligárquica.³³

En la restauración oligárquica de finales de los ochenta destacan: la existencia de diversos partidos y proyectos al servicio del bloque de poder; el activo apoyo estadounidense al sostenimiento del mismo (en

particular, pero no exclusivamente, a su expresión democristiana) por las vías paralelas de la represión y las reformas limitadas; la fuerte influencia militar sobre el gobierno; el desgaste político y consolidación militar de las fuerzas progresistas, y la intervención de una parte de éstas (Convergencia Democrática) en las elecciones de 1989, en los reducidos espacios de lucha "legal" que ofrece el sistema, a fin de reinsertarse en la vida política del país.

Aunque todavía no se ha dicho la última palabra, en opinión de los autores de este trabajo, la guerra civil ha producido una profunda recomposición del bloque de poder. Por un lado, desperdigándolo y dando lugar a que sean diversas las fuerzas políticas que lo representan. Por otro lado, y junto con el apoyo estadounidense, la prolongación y estancamiento de la guerra civil, la política de reformas limitadas y la relativa apertura político-electoral de años recientes han permitido al bloque de poder —en el momento actual por la vía arenista— seguir siendo gobierno y ganar legitimidad entre importantes sectores —mayoritariamente urbanos— de la población.

En definitiva, la guerra civil ha desembocado —¿provisoriamente?— en una restauración oligárquica revestida de legitimidad social, que se adapta al proyecto de modernización de la estrategia contrainsurgente.

Notas

- 1 Este ensayo forma parte de un proyecto más amplio relativo a los bloques de poder en América Latina, coauspiciado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM y el Departamento de Sociología de la UAM-Iztapalapa.
- 2 Alistair White, *El Salvador*, UCA, San Salvador, 1983.
- 3 Carlos Cabarruz, *Génesis de una revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador*, La Casa Chata, México, 1983.

- 4 El texto completo del "Pacto Democracia Cristiana-Fuerza Armada", se encuentra en Mariano Castro Morán, *Función política del ejército salvadoreño en el presente siglo*, UCA, San Salvador 1984, págs. 416-419.
- 5 Véanse, p. ej., Manuel Sevilla, *Visión global de la concentración económica*, CINAS, México, 1984; Antonio Álvarez-Solís [et al.], *El Salvador, la larga marcha de un pueblo (1932-1982)*, Revolución, Madrid, 1982, págs. 24-32; Edgar Jiménez y Luis de Sebastián, *El Salvador. Estado oligárquico y desarrollo económico-social, 1974-1979*, CINAS, México, 1980; Eduardo Colindres, *Fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña*, UCA, San Salvador, 1977; Rafael Menjívar, *Acumulación originaria y desarrollo del capitalismo en el Salvador*, EDUCA, San José, 1980.
- 6 Datos de Antonio Alvarez-Solis [et. al.], *op. cit.*, págs. 29-32.
- 7 Sevilla, *op. cit.*, pág. 21.
- 8 *Ibidem*, pág. 24. Los anexos del trabajo de Sevilla identifican claramente a los 114 grupos.
- 9 *Ibid*, pág. 30.
- 10 Enrique Baloyra, *El Salvador en transición*, UCA, San Salvador, 1987.
- 11 Laurence R. Simon y James C. Stephens, *El Salvador Land Reform 1980-1981*, Impac Audit, OXFAM America, Boston, Ma., 1981; y Philip Wheaton, *Agrarian Reform in El Salvador: A Program of Rural Pacification*, Epica Task Force, Washington, 1980.
- 12 Grupo Ad Hoc, Ministerio de Planificación y Comisión Nacional de Asistencia a la Población Desplazada, "La población desplazada 1980-1987", en CENITEC, *Presencia*, Año 1, abril-junio de 1988, San Salvador, pág. 129.
- 13 CEPAL, *Notas para el estudio de América Latina, 1987. El Salvador*, I.C./MEX/L. 86, 3 de agosto de 1988, México, pág. 25.
- 14 Enrique Baloyra, *El Salvador en transición*, *op. cit.*, pág. 196.
- 15 "Pronunciamento de la Alianza Productiva de El Salvador y de la Unidad Empresarial Salvadoreña, en torno al comunicado franco-mexicano", 31 de agosto de 1981, *El Mundo*, San Salvador, 2 de septiembre de 1981.
- 16 Salvador Arias, *Los subsistemas de agroexportación en El Salvador. El café, el algodón y el azúcar*, UCA, San Salvador, 1988.
- 17 Para una semblanza del sistema de partidos salvadoreños, véase Cristina Eguizábal, "El Salvador: Elecciones sin democracia", *Polémica*, núm. 14-15, marzo-junio de 1984.
- 18 Raúl Benítez Manaut, "El Salvador 1984-1988: guerra civil economía y política", en *Realidad económico-social*, 6, UCA, San Salvador, noviembre-diciembre de 1988, págs. 535-536.
- 19 Estatutos del Partido Alianza Republicana Nacionalista, San Salvador, 1981.
- 20 Benítez, *op. cit.*, pág. 536. Véase también Ignacio Martín Baró, "El llamado de la nueva derecha", en *ECA*, núm. 403-404, San Salvador, mayo-junio de 1982.
- 21 Mark Hatfield, Jim Leach y George Miller, *Bankrolling Failure United States Policy in El Salvador and the Urgent Need for Reform*, A Report to the Arms Control and Foreign Policy Caucus, Washington, D.C., noviembre de 1987.
- 22 Ricardo Córdova, "Periodización del proceso de crisis (1979-1988)", en Edgar Jiménez [et al.], *El Salvador: Guerra política y paz (1979-1988)*, CINAS-CRIES, San Salvador, 1988.
- 23 Su candidato triunfante, Alfredo Cristiani, es un importante hacendado y sexto mayor exportador de café del país.
- 24 Consejo Central de Elecciones de El Salvador, *Elecciones de Presidente y Vicepresidente, 19 de marzo de 1989*, 24 de marzo de 1989, San Salvador.
- 25 Ver Mariano Castro Morán, *Función política del ejército salvadoreño en el presente siglo*.
- 26 Ver Gabriel Aguilera P., "Autonomización y corporativización castrense. El caso de Centroamérica", en Augusto Varas (coordinador), *La autonomía militar en América Latina*, Nueva Sociedad, Caracas, 1988; Mariano Castro Morán, "Visión político-militar de la guerra: caso El Salvador", en *Presencia*, Año 1, núm. 3, San Salvador, oct.-dic. de 1988; Adolfo Arnoldo Majano, "Las fuerzas armadas en Centroamérica", en *Presencia*, *idem*; y Raúl Benítez Manaut, *La teoría militar y la guerra civil en El Salvador*, UCA, San Salvador, 1989.
- 27 Raúl Benítez Manaut, "Guerra e intervención norteamericana" en Edgar Jiménez [et al.], *El Salvador: Guerra, política y paz (1979-1988)*, pág. 30.
- 28 Alexander Segovia, "Límites y dilemas de la política económica" en Edgar Jiménez [et al.], *El Salvador: Guerra, política y paz (1979-1988)*, pág. 123.
- 29 Fernando Flores Pinel, "El estado de seguridad nacional en El Salvador: un fenómeno de crisis hegemónica", en *Foro Internacional*, vol. XX, abril-junio de 1980.
- 30 véase Rodolfo Cardenal, *El poder eclesiástico en El Salvador*, UCA, San Salvador, 1983; vs. auts., *La iglesia en El Salvador*, Loquez, Salamanca, 1982; e Iván D. Paredes, "La situación de la Iglesia católica en El Salvador y su influjo social", en *ECA*, San Salvador, julio-agosto de 1982.
- 31 "Debate Nacional 1988. Documentos y Análisis", en *ECA*, núm. 478-479, San Salvador, agosto-septiembre de 1988.
- 32 Véase Segundo Montes, *Estructura de clases y comportamiento de las fuerzas sociales*, UCA-IDHUCA, San Salvador, 1988.
- 33 Véase Gabriel Gaspar, *El Salvador: el ascenso de la nueva derecha*, CINAS, México, 1989.

